

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISION LABORAL

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	Claudia Patricia Aguirre Álzate Valentina Gómez Aguirre María Camila Gómez Aguirre
DEMANDADO	Esther Cecilia Velásquez Zapata
PROCEDENCIA	Juzgado Trece Laboral del Circuito
RADICADO	05001 3105 013 2020 00214 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 055 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Honorarios profesionales -prescripción
DECISIÓN	Confirma sentencia

En la fecha, **veintiocho (28) de marzo de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Claudia Angélica Martínez Castillo y como ponente, Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento con relación al grado jurisdiccional de consulta en favor de: **Claudia Patricia Aguirre Álzate, Valentina Gómez Aguirre y María Camila Gómez Aguirre**, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario laboral que promovieran contra **Esther Cecilia Velásquez Zapata**. Radicado único nacional 05001 3105 **013 2020 00214** 01.

Auto: en los términos de la documental remitida vía correo electrónico se procede a reconocerle personería jurídica al Doctor Christian Daniel Mendoza Trillos, para que continúe con la representación de las demandantes.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de las restantes

integrantes el proyecto, estudiado, discutido y aprobado mediante acta **Nº. 007**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación:

Antecedentes

Se tiene que las actoras convocaron a juicio a la demandada pretendiendo se declare que entre esta última y John Jairo Gómez Jaramillo y, posteriormente con Nubia Elena Buitrago, como continuadora del vínculo contractual con ellas como herederas universales, se suscribió un contrato de prestación de servicios, el cual se cumplió a cabalidad por parte de los profesionales del derecho, y se quebrantó por parte de la señora Velásquez Zapata al no haber reconocido, ni pagado el 20% pactado sobre las resultas favorables, así como el 100% de las costas y agencias en derecho; en consecuencia, piden se condene a la pasiva al pago de los honorarios por el trámite adelantado, así como las costas y agencias en derecho que cause este asunto.

En sustento de ello afirman que, la señora Cecilia Velásquez Zapata, contrató los servicios profesionales de John Jairo Gómez, con el fin de adelantar reclamaciones administrativas y judiciales ante Colfondos y Colpensiones para obtener el traslado de aportes, así como el reconocimiento y pago de la reliquidación de la pensión de vejez, instaurándose demanda ordinaria el 22 de enero de 2013, cuyo reparto le correspondió al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, asignándosele el radicado 004-2013-00985-01, proceso en el que se emitió sentencia de primera instancia el 27 de julio de 2015, y de segunda el 25 de octubre de 2016. Que mientras ejercía el mandato, el 25 de agosto de 2016, falleció John Jairo Gómez, razón por la cual, ellas en calidad de herederas universales procedieron a suscribir contrato de prestación de servicios profesionales 27 de agosto de 2016 con la abogada Nubia Elena

Buitrago Gómez, a fin de que continuara con el mandato inicialmente otorgado al profesional fallecido, encontrándose dentro de los procesos a su cargo el de la demandada, con quien se suscribió convenio profesional el 22 de septiembre de 2016. Manifiestan que Nubia Buitrago, no fue facultada por ellas como herederas para emitir paz y salvos contractuales por concepto de honorarios; que la señora Cecilia Velásquez, una vez finalizada la relación contractual de ellas como herederas de John Jairo con Nubia Elena, se negó a continuar el mandato y, suscribió nuevo contrato con la abogada Nubia Elena, sin cancelarles los honorarios **-20% de lo obtenido-** y, las costas procesales **-100%-**, rubros causados en virtud de la asesoría y representación administrativa y judicial ofrecida por el John Jairo Gómez y posteriormente por Nubia Elena Buitrago, dada la vinculación que se dio para que continuara con las diligencias correspondientes ante el deceso del primer profesional; que la labor realizada por los abogados siempre fue pronta, vigilante, oportuna, responsable y eficaz, y de ello dan cuenta las sentencias obtenidas.

Después de subsanadas las falencias advertidas por el juzgado de conocimiento, en auto del **01 de diciembre de 2020, se admitió la acción.** Notificada la demandada por conducta concluyente, procedió a dar respuesta a través de apoderado, aceptando las actuaciones desplegadas por el Dr. John Jairo Gómez, esto es, las gestiones administrativas y judiciales, como la presentación de la demanda, así mismo admite la decisión emitida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito y el Tribunal Superior de Medellín y, la fecha del deceso del togado. Los restantes supuestos no le constan; no obstante, aduce que el contrato con el Doctor John Jairo finalizó con la muerte de este, en tanto, después de dicha fecha se vio obligada a conseguir nueva apoderada, con quien suscribió acuerdo como persona natural y no jurídica, siendo la encargada de culminar la actuación, cancelándole a

esta los honorarios al no haberse tenido conocimiento de demanda de regulación. **Resistió las pretensiones,** formulando **las excepciones** de prescripción, falta de legitimación en la causa por activa, pago e inexistencia de la obligación.

La primera instancia culminó con **sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito, el 25 de febrero del año en curso,** en la que declaró probada la excepción de prescripción e impuso costas a cargo de las demandantes y en favor de la demandada, fijando el monto de las agencias en derecho en la suma de \$1.160.000,00.

En sustento de ello argumentó la falladora, que del análisis en conjunto de los medios de prueba a la luz de la sana crítica, se podía concluir que el poder otorgado por la señora Esther Cecilia Velásquez Zapata a la Doctora Nubia Elena Buitrago Gómez, no se dio como consecuencia del pacto realizado entre la citada profesional y las herederas y cónyuge supervivientes del finado John Jairo Gómez, dado que, la transacción efectuada entre estas, solo anuncia que Valentina Gómez Aguirre, como propietario de la firma de abogados, asesorías jurídicas, contrató todos los servicios de la doctora Buitrago Gómez, sin que se advierta en el expediente prueba que dé cuenta de la existencia de la mencionada firma de abogados y menos su constitución como persona jurídica, en tanto, lo que se evidencia conforme al certificado de existencia y representación, es que la firma **Gómez Asesoría Jurídica S.A.S., se constituyó el 24 octubre 2017,** esto es, con posterioridad a la suscripción del contrato de prestación de servicios de la demandada y Nubia Elena Buitrago, y a la celebración de la transacción, resultando claro, que el otorgamiento del poder por la señora Velásquez Zapata a la abogada Buitrago Gómez, el día 22 de septiembre de 2016, fue un acto independiente de los intereses de las demandantes, teniéndose por culminada la actuación del doctor John Jairo Gómez Jaramillo con su

fallecimiento, el 25 de agosto del año 2016, fecha en la que se tornó exigible el derecho a la cancelación de los honorarios, sin que se efectuara, dentro de los 3 años siguientes, solicitud de pago de los mismos, así como tampoco se ejerciera actuación tendiente a favorecerse con la interrupción de la prescripción en los términos del artículo 489 del Código Sustantivo del Trabajo, por lo que, **la reclamación del derecho se podía ejercer hasta el 25 agosto 2019, y como la demanda se presentó el 29 de julio de 2020, operó el fenómeno extintivo de la prescripción.**

Al no haberse interpuesto recurso y ser la sentencia totalmente adversa a los intereses de la parte demandante, se conoce de la misma en el grado jurisdiccional de consulta, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del C.P.T y la S.S.

De la oportunidad para presentar alegatos hicieron uso las **demandantes**, esgrimen que en las ocasiones en que la demandada se reunió con Nubia fue en la oficina de John Jairo, adicional a que entre las partes se celebró transacción y terminación de contrato de prestación de servicios profesionales, pudiéndose desprender del mismo que Valentina Contrató a Nubia para prestar sus servicios profesionales a favor de la cual se cancelaban honorarios por \$3.000.000, mensuales, más un porcentaje de las sumas de dinero resultantes de los diversos procesos, por tal, se puede inferir que la Dra. Nubia no actuaba en forma independiente y particular, sino que continuó con las asesorías y litigios del Dr. Gómez.

Afirma que, teniendo en cuenta que los honorarios se pactaron a cuota Litis, y que mediante acto administrativo SUB64272 del 12 de mayo de 2017, se hizo efectiva la condena impuesta dentro del proceso 004-2013-00985-01, no es posible contabilizar el término desde la ejecutoria

de la sentencia, así como tampoco desde el fallecimiento del abogado, sino desde el pago efectivo de la condena, esto es, desde junio de 2017, cuando se le reconoce la prestación y se incorpora en la nómina.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones

Para lo que interesa a la Sala, con los medios de convicción allegados quedan probados los siguientes supuestos: con escritura pública 2133 del día 31 de octubre de 2019, la calidad de herederas de las demandantes María Camila Gómez Aguirre y Valentina Gómez Aguirre y, la calidad de cónyuge supérstite de la señora Claudia Patricia Aguirre Álzate, respecto del causante John Jairo Gómez, quien falleció el 25 de agosto de 2016; que el 22 de septiembre de 2016, Esther Cecilia Velásquez Zapata, celebró contrato de prestación de servicios profesionales con Nubia Elena Buitrago Gómez, para que la siguiera, *representándola en el proceso de demanda contra Colpensiones – Colfondos y Porvenir en busca de la nulidad del traslado, reliquidación de la pensión de vejez, retroactivo, intereses e indexación*, pactándose como honorarios la *suma correspondiente del veinte por ciento (20%) de todo o pagado...*, *más el ciento por ciento (100%) de las costas y agencias en derecho*. El 7 de febrero de 2017, Nubia Elena Buitrago y Valentina Gómez Aguirre (**en calidad de propietaria de la firma de abogados denominada ASESORIAS JURIDICAS**), celebraron acta de transacción y terminación del contrato de prestación de servicios profesionales, dejándose consignado en la cláusula primera, que la Doctora Nubia Elena: *fue contratada por la señorita Valentina Gómez Aguirre en su calidad de propietaria de la firma de abogados denominada Asesoría Jurídica en el mes de septiembre del año 2016, mediante contrato de prestación de servicios en forma verbal, a fin de que la primera prestara servicios profesionales de abogada en dicha firma en funciones de representación judicial de los clientes de la firma, Asesorías Jurídicas, atención al cliente, asistencia a diligencias judiciales en*

Juzgados Laborales, administrativos y ante el Tribunal Superior de Medellín y el Tribunal Contencioso Administrativo, además de las atenciones de los trámites administrativos ante los fondos de pensiones de esta ciudad. Y en la cláusula quinta acordaron que decidían terminar el contrato de manera voluntaria, comprometiéndose:

La doctora, NUBIA ELENA BUITRAGO GÓMEZ se compromete a la entrega del total de los procesos judiciales y trámites administrativos que se encuentran en su poder, es decir, todo lo que esté a nombre suyo como abogada de la firma de abogados Asesorías Jurídicas, ese procedimiento se hará sustituyendo todos y cada uno de los poderes que estén por su cuenta a la nueva abogada de la firma, así mismo, y en el mismo acto jurídico de la sustitución presentará renuncia a los poderes, todo a fin de que por cuenta de ella no quede absolutamente ningún proceso, ningún trámite y ningún poder, además de que no quede ninguna responsabilidad por cuenta suya en trámites y procesos de la firma de abogados y queden a paz y salvo por cualquier concepto.

Por su parte la señorita Valentina Gómez Aguirre en su calidad de propietaria de la firma de abogados Asesorías Jurídicas se compromete a diligenciar todo lo concerniente a la finalización de los trámites y procesos en cabeza de la abogada Nubia Elena Buitrago Gómez, es decir, a redactar las sustituciones y renunciaciones de los poderes y el envío de cada uno de ellos a los trámites y procesos respectivos.

Así mismo se compromete a realizar una lista fidedigna, completa y actualizada de todos y cada uno de los procesos judiciales que se tramitaron y terminaron con sentencia favorable y que se encuentran en firme, tanto en los juzgados laborales y administrativos como en los tribunales Laboral y administrativo y que se terminaron entre el mes de septiembre de 2016 y enero de 2017 a fin de reconocer y pagar a la abogada Nubia Elena Buitrago Gómez la totalidad de los porcentajes pactados entre las partes y a que se hace alusión en el numeral SEGUNDO de la precedencia.

La abogada Nubia Elena Buitrago Gómez, certificó que la señora Cecilia Velásquez, se encontraba a paz y salvo por el trámite judicial adelantado ante el Juzgado Cuarto Laboral, radicado 004-2013-00985-00. No se aporta contrato escrito de prestación de servicios celebrado entre Esther Cecilia Velásquez Zapata y el abogado John Jairo Gómez Jaramillo, en el cual se evidencie el convenio relativo al monto de los honorarios profesionales a reconocer.

De conformidad con lo expuesto, el **problema jurídico** se contrae en determinar, si la señora Cecilia Velásquez les adeuda a las actoras suma alguna por concepto de honorarios causados con ocasión de la actividad profesional desplegada por el fallecido John Jairo Gómez, y con posterioridad al deceso de este, por la doctora Nubia Elena Buitrago Gómez, al manifestarse por las reclamantes que la contrataron para que continuara con los procesos que el Doctor Gómez había asumido, ello no sin antes establecer si la razón está de parte de la juez, al haber

considerado que la acción se vio afectada por el término extintivo de la prescripción.

Pues bien, para resolver el asunto, sea primero advertir que el artículo 2142 del Código Civil define el contrato de mandato como aquel en el que una persona confía a otra la gestión de uno o más negocios, esta forma de contratación se extiende a todos aquellos servicios ofrecidos por las profesiones y carreras que suponen largos estudios, tal y como lo determina el artículo 2144 de la misma obra, **sin que tal acuerdo exija solemnidad alguna, siendo viable su realización verbal**, en los términos del artículo 2149 ibídem; sin embargo, su ejecución deberá ceñirse rigurosamente a los términos pactados, que en caso de ser oneroso, que es la regla general, implicará la obligación a cargo del mandante de pagar la prestación acordada, una vez la gestión haya sido ejecutada.

Sobre la generación de honorarios en este tipo de convenios, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, en sentencia SL, 10 dic 2007, rad. 10046, reiterada en la SL11265-2017 y en la SL2545-2019, preciso:

[...] es de suponer que el ejercicio de la abogacía como el de cualquier profesión liberal genere honorarios, pues los profesionales por lo general obtienen el sustento de los servicios que prestan, de manera que debe concluirse que la onerosidad es un elemento de la naturaleza del contrato de prestación de servicios profesionales, pero no uno esencial en cuanto, a diferencia de lo que ocurre con el contrato de trabajo, es legalmente permitido que quien presta un servicio profesional independiente decida hacerlo en forma gratuita, o de manera que su retribución sea aleatoria, como cuando se condiciona a la obtención de un resultado (resalta la sala)

Así las cosas, quien ejerce la profesión de la abogacía, como el que ejecuta cualquier otra profesión liberal que genere honorarios, salvo que decida hacerlo de manera gratuita, tiene derecho a reclamar el pago

cuando esté demostrada la realización actividad pactada.

Luego, al no ser objeto de discusión el contrato de prestación de servicios que rubricó la parte pasiva con el Doctor John Jairo, pues así fue aceptado desde la contestación de la demanda y admitido en el interrogatorio de parte, pasa la Sala a analizar la existencia del derecho, es decir, si surgió en cabeza de las demandantes una acreencia específica a efectos de ser reclamada, sin que se viera afectada por el fenómeno extintivo de la prescripción, el cual, como se sabe, es una institución jurídica que tiene su fuente legal en el artículo 2512 del C.C., a través de dos figuras: la adquisitiva, también conocida como *usucapión* y la *extintiva* o *liberatoria*, que es un modo de aniquilar derechos u obligaciones, como resultado de su no reivindicación, alegación o defensa durante el tiempo determinado por la ley sustancial, por parte de su titular, castigando esta figura jurídica la inactividad del acreedor **laboral** en reclamar, dentro del término trienal a partir del momento de su exigibilidad, **artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.**

Ahora, atendiendo las particularidades del caso, no puede perderse de vista que el artículo 76 del CGP, regula específicamente las consecuencias de la terminación de un mandato judicial, bien por la revocatoria directa, ora a través de la constitución de un nuevo apoderado, o simplemente por la renuncia al poder de quien funge como apoderado, en el sentido de que tal norma habilita al profesional, en este caso a sus herederas y cónyuge supérstite, para hacer efectivo su derecho a percibir los honorarios, bien a través de un proceso ordinario, como el presente, o a través del incidente de regulación promovido dentro de los 30 días siguientes, siendo el trámite del mencionado incidente facultativo, esto, siempre y cuando la obligación sea pura y no condicionada, pues, si se pacta entre las partes, una condición

suspensiva, esto es, la resultas positivas de la gestión, lo cual no es el caso de autos, al no evidenciarse pacto alguno, dicha obligación condicional, hace que, solo cuando se cumpla la misma, nazca y se haga exigible la obligación para el titular de la prestación a fin de poder reclamar dichos honorarios, siendo solo a partir del cumplimiento de dicha situación cuando se debe comenzar a contabilizar el término de prescripción (véase sentencia SL1817-2020)

Así, atendiendo los argumentos expuestos en la demandada y al material probatorio, se advierte que el Doctor John Jairo Gómez, falleció el 25 de agosto de 2016 y, que con posterioridad a dicho insuceso, el 22 de septiembre de 2016, Esther Cecilia Velásquez Zapata, celebró contrato de prestación de servicios profesionales con Nubia Elena Buitrago Gómez, para que la siguiera representando en el proceso contra Colpensiones – Colfondos y Porvenir, sin que se evidencie de dicho documento o de ningún otro, que la misma estuviere fungiendo como apoderada sustituta de las hoy demandantes dado el convenio suscrito entre estas para que continuara representándolas ante el deceso de su padre y cónyuge, por el contrario, refleja su rúbrica como persona natural; adicional a que, si bien no se desconoce que en el acta de transacción celebrada el 7 de febrero de 2017, entre Nubia Elena Buitrago y Valentina Gómez Aguirre (**en calidad de propietaria de la firma de abogados denominada ASESORIAS JURIDICAS**), convinieron la terminación del acuerdo celebrado, dejándose indicado que la primera fue contratada por Valentina Gómez Aguirre en su calidad de propietaria de la firma de abogados denominada Asesoría Jurídicas en el mes de septiembre del año 2016, a fin de que les prestara sus servicios profesionales como jurista, también lo es que no se especifica desde que día del mes de septiembre se 2016 se llevó a cabo, esto es, si fue antes o después del 22 de septiembre, cuando Cecilia Velásquez, contrató a Nubia Elena Buitrago Gómez, adicional a que atendiendo al Certificado

de Existencia y Representación Legal, la razón social **GOMEZ A. ASESORIAS JURIDICAS S.A.S.** fue constituida el 24 octubre 2017, sin que se advierta la presencia de otra persona jurídica a nombre de las actora con fecha anterior, así como tampoco se avizora medio de convicción alguno que dé cuenta que la demandada le hubiese conferido poder a Valentina Gómez para continuar con el trámite y, que esta a su vez hubiese sustituido en la Doctora Nubia Elena, luego, al no advertirse que la Doctora Nubia Elena estaba representando los intereses de las hoy demandantes, se tiene que el vínculo jurídico que unía la señora Cecilia Velásquez y al Doctor Gómez, finalizó el 25 de agosto de 2016, cuando se dio el deceso de este, siendo clara la exigibilidad de las obligaciones a partir de la culminación de los servicios prestados por este ante su fallecimiento, en tanto, lo que realmente justifica la causación de honorarios profesionales es la prestación del servicio profesional, y este se dio hasta dicha fecha, teniendo las actoras tres años para interponer las acciones judicial pertinentes en aras de reclamar los honorarios, por lo que habiendo esperado hasta el 29 de julio de 2020, su acción se encuentra prescrita, imponiéndose así **la confirmación de la sentencia revisada.**

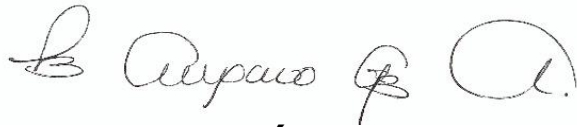
Sin costas en esta instancia al analizarse en el grado jurisdiccional de consulta.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **confirma** la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de esta ciudad dentro del proceso ordinario promovido por **Claudia Patricia Aguirre Álzate, Valentina Gómez Aguirre y María Camila Gómez Aguirre**, en contra de **Esther Cecilia Velásquez Zapata.**

Sin costas en esta instancia al analizarse la decisión en el grado jurisdiccional de consulta.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO, que se fijara por secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.


Los magistrados (firmas escaneadas)



LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO